

Notas sobre la Constitución histórica y la Constitución política de 1857

Ignacio Sosa*

Acostumbrados a una abundante literatura, de corte jurídico, para la cual la Constitución es un objeto, por así decirlo, de culto casi idolátrico, una visión que preste atención a la enconada pugna decimonónica entre quienes habían pertenecido durante generaciones al grupo dominante y que, además, tenían abundantes intereses económicos y políticos, y quienes anhelaban un cambio libertario e igualitario, puede ayudar a entender las dificultades que tuvo la sociedad para ocuparse de las garantías que articulan el desarrollo de la ciudadanía en nuestro país.

Si bien la Constitución, actualmente, se identifica con las aspiraciones, con las esperanzas, la historia muestra que más bien expresó los temores de quienes tenían intereses que defender. Dos fueron los temores cristalizados con la Constitución de 1857: el temor a la igualdad, mismo que se expresó a través de la enconada defensa del privilegio eclesiástico y militar que se manifestó en el bárbaro grito de los nuevos cruzados ¡religión y fueros! y el temor al pueblo, a la plebe, a los indios, mestizos y mulatos que, por ser mayoría, podían representar un desafío a los dominadores de siempre. Las esperanzas referidas a la posibilidad de una convivencia democrática, igualitaria, pronto sufrieron un desengaño.

La Constitución de 1857 forma parte de la ola política conocida como modernidad y que comprende el ciclo de las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, transformó la arcaica estructura del Antiguo Régimen y sentó las bases de los regímenes democráticos en ambas costas del Atlántico. La influencia de esas tres revoluciones, consideradas en conjunto, se hace sentir con intensidad hasta nuestros días.

El radical giro en la historia política fue una consecuencia del surgimiento simultáneo del Estado nación y del ciudadano, fenómenos ambos, sin los cuales no se comprende el significado de la Constitución política. Hasta ese momento, por necesidades derivadas de la necesidad de legitimar al Estado, así como por la preeminencia que —en el Antiguo Régimen— tuvo la libertad del cuerpo social sobre la libertad individual, el estudio del Estado ha sido privilegiado en detrimento del análisis de la libertad del ciudadano, considerado hoy como la célula que le da vida al cuerpo social. El estudio de esta nueva célula, de su aparición, del análisis de los elementos que lo conforman, sólo se emprendió en forma sistemática con el inicio de los procesos de transición desde regímenes autoritarios a la democracia ocurridos en Latinoamérica

*Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

a partir de los años ochenta del siglo xx. Capítulo por escribir en la historia política de la región, así como en la de nuestro país, corresponde a la historia de la ciudadanía.

El orto del mundo moderno representó la universalización del régimen democrático. El nacimiento del mundo político moderno significó un cambio que se produjo en el mundo Atlántico, tanto en su vertiente europea como en su vertiente americana, casi en forma simultánea. Dicho cambio representó una nueva forma de concebir la relación política, hasta ese momento jerárquica y, a partir del mismo, igualitaria, entre los individuos y entre éstos y el poder. También representó el fin de una postura que consideraba que los intereses de éste debían privar sobre los intereses de aquéllos. Por último, representó el control que los ciudadanos debían tener sobre el poder para que éstos pudieran ser felices. El cambio, en síntesis, representó para el naciente ciudadano inglés, el francés y el estadounidense, que cada uno de ellos, siguiendo su propia vía nacional, se hiciera consciente de su poder e iniciara en su respectivo país una transformación de su visión política equivalente a la que, siglos antes, realizara Copérnico para el mundo astronómico.

Para el mundo moderno francés y estadounidense, la vieja visión de la monarquía como centro del universo político, con los individuos funcionando como sus satélites, representaba una interpretación errónea del funcionamiento de la sociedad; la relación entre los individuos y el gobierno debía ser invertida de acuerdo a los principios de los derechos naturales. Para garantizar éstos surgió la necesidad de modificar las bases de la sociedad política; para el éxito de este ejercicio fue necesario establecer un claro corte, una línea de ruptura, entre el pasado y el presente de ese momento. Como de una visión nueva se trataba, para la cual no había antecedentes que lo justificaran, se hizo necesario acudir a axiomas, a principios lógicos, que no requerían constatación histórica. Estos axiomas, es bien sabido, afirmaban que todos los hombres eran iguales y que tenían derechos naturales, es decir, anteriores a cualquier forma

de organización política; que los derechos naturales, evidentes para la razón, tenían preeminencia sobre cualquier otro derecho sostenido en argumentos históricos y, en consecuencia, en la pugna entre los derechos históricos y los naturales, estos últimos debían prevalecer.¹

Por su parte, la vía inglesa, de acuerdo con pensadores como Burke, siguió una línea que rechazó la idea de los derechos humanos y consideró, en cambio, que debía salvarse lo que la tradición y la *common law* habían logrado a lo largo de varios siglos.² De esta manera el mundo moderno aprendió el doble significado de Constitución: política, por una parte, e histórica, por la otra. La distinta valoración del significado político atribuido a los derechos humanos y a los derechos históricos, a lo largo de la historia moderna, contradice la perspectiva contemporánea que ve en ellos un valor universal, ahistórico.

La Constitución, en su doble sentido, es decir, inglés y francés, expresan tanto el ideal igualitario como el control que la sociedad debe tener sobre el gobierno. Desde otra perspectiva, la Constitución, si bien requería no ya de súbditos sino de ciudadanos, también necesitaba

¹ Estos planteamientos, hoy moneda corriente, en el momento de la independencia eran manejados sólo por unos pocos habitantes preocupados por problemas políticos. *El Despertador Americano*, órgano de los independentistas describía, en su página 18, la situación en su primer número correspondiente al 20 de diciembre de 1810: "Mientras que todo el Reino experimenta la más fuerte y general fermentación, mientras que los ánimos todos están agitados de la conmoción más viva, advirtiéndose en todos los Americanos una actitud intrépida y belicosa; el apático mexicano vegeta a su placer, sin tratar más que de adormecer su histórico con sendos tarros de *pulque*".

² "La sola idea de constituir un nuevo Gobierno es suficiente para llenarnos de disgusto y de horror. Desearíamos, tanto en el periodo de la Revolución como después, derivar del pasado todo cuanto poseemos como un legado de nuestros mayores. Hemos tenido cuidado de no injertar en el cuerpo y tronco de nuestra herencia ninguna rama extraña a la naturaleza del árbol primitivo. Hasta ahora todas las reformas se han hecho respetando el principio del respeto al pasado; y espero ¿qué digo? estoy seguro que todas las reformas que se realicen en el futuro estarán cuidadosamente basadas sobre análogos precedentes, autoridad y ejemplo". Edmund Burke, *Reflexiones sobre la Revolución francesa*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1978, p. 89.

de un nuevo tipo de gobernantes; por esta razón, identificar el nacimiento político del país con la Constitución, como fue costumbre en el discurso político mexicano del siglo xx, es un abuso porque, entre otras razones, de la nación se desconoce su nacimiento, mientras que el nacimiento de la democracia tiene un origen cierto.

México surgió como país independiente pero no como país democrático. Si bien ha habido un empeño en mostrar que en nuestro país fueron coincidentes el nacimiento del país independiente y el de país democrático, la historia muestra lo contrario.

Las nacientes vías por las que el mundo Atlántico arribó a la modernidad política, entendida ésta como la democracia, fueron observadas con admiración por los habitantes de la Nueva España. La vía inglesa no pudieron observarla porque requería la experiencia directa, pero pudieron estudiar, en cambio, las revolucionarias de Estados Unidos y Francia, que tuvieron numerosos publicistas. Estas dos vías representaron, para los novohispanos, los dos caminos que su naciente cuerpo político podía seguir para acceder a la Modernidad. Empero, la experiencia revolucionaria de Francia fue vista con temor por la forma en la que impactó tanto en la independencia de Haití como por sus efectos en la metrópoli española durante la invasión napoleónica. En cambio, la revolución estadounidense fue vista sin intermediación alguna; el carácter de esta revolución, anticolonial y democrática, despertó enormes simpatías que explican, en parte, la notable influencia que tuvo en México y en Hispanoamérica la vía desarrollada por los insurgentes estadounidenses.³

³ Una muestra de la admiración por el impetuoso crecimiento logrado por los Estados Unidos se refleja en las siguientes cifras de *El Despertador Americano*, correspondientes a su número 7, del 17 de enero de 1811: “Desde el año de mil setecientos setenta y cuatro hasta el de mil ochocientos tres, creció la población desde dos millones de almas a cinco millones; las tierras abiertas y cultivadas desde veinte a treinta y seis millones de acres; las milicias desde cuatrocientos mil hombres a novecientos mil; los ma-

Tanto por su significado de liberación del yugo colonial como por haber prescindido del terror y las convulsiones que caracterizaron la Revolución francesa, la vía estadounidense parecía la adecuada para servir de modelo a la generación que inició la primera Guerra de Independencia de México. En cambio, no ocurrió lo mismo con la segunda guerra de independencia, es decir, la de la Reforma. En aquel momento no se ponderó el peso que representaba la historia, ni tampoco el hecho de que la primera nación moderna careciera de ella.⁴ El voluntarismo de la primera generación de ciudadanos mexicanos no les permitió advertir que la fuerza del Antiguo Régimen, es decir, el régimen colonial, los había conformado de manera semejante a Francia y no a los Estados Unidos; ese voluntarismo tampoco les permitió advertir que si bien podían independizarse de la metrópoli de un solo tajo, no ocurriría lo mismo con el régimen colonial, ya que éste era consustancial a la sociedad novohispana.

Obsesionados aquellos miembros de la primera generación de ciudadanos por la tarea que debía desarrollar para alcanzar la independencia política del país, el establecer la libertad del ciudadano frente al poder no fue objeto de su atención. La historia de los primeros años

rineros desde quince mil a sesenta y tres mil; el producto de las rentas públicas desde seis millones de pesos a cuarenta y dos millones; el valor de las exportaciones desde seis millones a sesenta y tres”.

⁴ “Fue Thomas Paine, recién llegado de Europa, quien interpretó el nacimiento de la nación americana exclusivamente a la luz de la ideología abstracta que prevalecía en la última mitad del siglo XVIII. Un puñado de ingleses y americanos siguieron su pensamiento, pero la mayoría —ante el gradual crecimiento de las innovaciones— se inclinó ante la fusión de lo tradicional y el derecho moderno y lo repudiaron. Mientras en Europa continental la revolución debía luchar contra privilegios obsoletos y agresivos, en América esta situación no tenía cabida. Mirando retrospectivamente, el historiador puede afirmar que la revolución de las trece colonias no se realizó por motivos de ‘opresión’. Bajo el gobierno imperial británico las colonias eran política y socialmente más libres y aparecían menos oprimidas por impuestos que cualquier parte del mundo, incluyendo a Inglaterra”. Kohn Hans, *El pensamiento nacionalista en los Estados Unidos*, Buenos Aires, Troquel, 1966, p. 27.



Teatro Iturbide donde se celebraron el resto de las sesiones. Fototeca Constantino Reyes-Valerio, CNMH/INAH. Fondo Carranza. Historia Gráfica del Gobierno Constituyente, celebrado en Querétaro de Arteaga, del 20 de noviembre de 1916 al mes de febrero de 1917.

de vida independiente muestra la dificultad que aquella generación tuvo para acordar cuál era la prioridad: si la urgente de consolidar la soberanía nacional o la de hacer efectiva la soberanía popular en términos de control sobre el gobierno. En los documentos de la época se observa la atención prestada a las acciones que debían realizarse para la creación y desarrollo de instituciones que le permitieran al país independiente enfrentarse a los poderes de otras potencias, así como conseguir que éstas le otorgaran el reconocimiento como país autónomo. La soberanía popular, ámbito de lucha interna entre el individuo y el poder del Estado, significativa por el enfrentamiento entre los partidarios de los poderes tradicionales y los simpatizantes de una nueva forma de relación política, en cambio, no fue debatida con la amplitud que se hizo en Estados Unidos y Francia.

La primera generación de ciudadanos mexicanos, en décadas iniciales del país independiente, se dividió y se enfrentó entre sí no por las garantías que la nación debía ofrecer al ciudadano, sino por las medidas que debían tomarse para consolidar la independencia. Un grupo consideraba que la organización federal era la mejor garantía, mientras que otro pensaba que lo conveniente era continuar con la práctica —colonial— del centralismo. Lo que se ponderaba eran los argumentos, en pro y en contra, de la mejor organización para garantizar la libertad de la nación, no la mejor organización para garantizar los derechos del ciudadano. Estas pugnas, esbozadas en los primeros años de la vida independiente, ocuparon los afanes de los ciudadanos mexicanos a todo lo largo del siglo XIX.

Para el estudioso de la cultura política mexicana resulta tan interesante como difícil de explicar el doble código que sobre la Constitución impera en nuestra sociedad. Por una parte, como si de un fetiche se tratara, el discurso oficial exalta el documento constitucional; lo reverencia en ceremonias donde lo equipara a las Tablas de Moisés y le atribuye la función de partera que ayuda al alumbramiento del México moderno que, por fin, ha dejado atrás la arbitrariedad. El discurso se complementa con referencias obliga-

das a la ilustre genealogía que la hermana con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por el otro lado, en la vida cotidiana cualquier analista puede observar el vulgar atropello a que cotidianamente se somete a la Constitución, tanto en los tribunales como por parte de funcionarios con distinto nivel de autoridad. Explicar esta obvia contradicción es una de las asignaturas pendientes de los historiadores que, si bien reiteradamente la han señalado, en cambio, no han abundado en el análisis de las causas.

El problema de la Constitución de 1857, en realidad de la mayoría de las constituciones, no es si simbolizó o no las fuerzas de la Modernidad, tampoco si ella reflejó la voluntad de las fuerzas victoriosas en la guerra civil; esto, en todo caso, representaría un problema historiográfico sobre el sentido de los acontecimientos. El problema fundamental es explicar las causas por las que el conjunto de la sociedad no la respetó y, más importante aún, explicar por qué Porfirio Díaz, gobernante en turno, no la acató. Si en la sociedad no existe la voluntad de respetarla, si el gobernante no comprende su obligación ni el significado que para los gobernados representa esta falta de voluntad, la Constitución es un mero documento, una referencia literaria; no un modelo que representa la solución al problema de la fuerza, de la arbitrariedad.

No se trata, como magistralmente lo hizo don Justo Sierra, de analizar si era una Constitución que se adecuaba, o no, al grado de evolución de la sociedad mexicana; si se había adelantado, por así decirlo, a su tiempo y no correspondía a la etapa de la evolución en la que el país se encontraba; de lo que se trata es de precisar por qué en esa etapa evolutiva de la sociedad mexicana los gobernantes interpretaron la norma constitucional de acuerdo con sus intereses. En este contexto, la respuesta de don Justo Sierra y la de Emilio Rabasa, en mi opinión, coincide: la dictadura era inevitable por la etapa evolutiva que vivía la sociedad mexicana. Con este supuesto, la interpretación del problema de la responsabilidad del gobernante, tópico central del régimen democrático, desaparece. La tesis

de Sierra y de Rabasa apunta que la responsabilidad corresponde a los tiempos y no a las decisiones de los hombres.⁵

En los tiempos actuales, de olas de la democracia y de democracias integrales, de comunidad de destino con América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y no con América del Sur, la aseveración pudiera resultar ofensiva, sin embargo, nuestros oídos se han hecho sordos a las voces con reclamos históricos del México profundo. Sin embargo, aquellos eran otros tiempos, otros sus valores y, en consecuencia, otras sus explicaciones; la de Rabasa, así como la de Sierra, descansó en el origen étnico de nuestra identidad. En aquellos años se inventó una nueva genealogía para la sociedad mexicana: el origen hispánico se marginó de la explicación científica; el indígena fue considerado irrelevante y todavía no surgía el mestizaje como el rasgo distinto de nuestra nacionalidad. En lugar de ambos, se adoptó lo latino como el elemento determinante. En el conflicto que se vivía en aquellos años entre el mundo anglosajón y el mundo latino, no había dudas sobre el lugar que nuestro país debía ocupar.

Rabasa afirma:

El cuerpo político norteamericano se formó y subsiste por la acción de fuerzas moleculares; el de los pueblos latinos, en general, por una fuerza de presión que tiende a reunir las moléculas dispersas. Nuestros pueblos por historia, por herencia y por educación descansan en la vieja concepción del Estado y derivan de esta concepción abs-

⁵ La idea de que la moralidad expresa los valores de una época determinada y que se modifica de acuerdo con la etapa evolutiva en la que una sociedad específica se encuentra, tiene en Samuel Huntington un representante en la ciencia política. Éste afirma que es evidente que la corrupción “existe en todas las sociedades, pero es más común en unas que en otras, y más frecuente en ciertos periodos de la evolución social”. Cfr. Samuel Huntington, *El orden político en las sociedades en cambio*, Buenos Aires, Paidós, 1990, p. 63.

tracta que no corresponde a ninguna entidad real, en tanto que el americano, que partió de la realidad del individuo y de su rudo derecho para constituir el *township*, el *bourg*, el condado no ha llegado, después de siglos de progreso institucional, al concepto de Estado, ni es probable que a él llegue, porque alcanzó el poder real de la nación, que basta para explicar todos los fenómenos políticos y para fundar todos los deberes del individuo para con el conjunto de los pueblos que liga el gobierno. Al revés de la ley americana, la nuestra tenía necesidad de constituir un gobierno central fuerte en su acción.⁶

De la extensa cita destaco, por relevante, la idea, reiterada del papel que desempeña el Estado como aglutinador de la sociedad y su complemento, la necesidad de un gobierno central fuerte. También destaco que, en oposición a la corriente actual que habla de una vía única para acceder a la Modernidad, en aquellos días se consideraba que, por lo menos, existían las dos descritas por el maestro Rabasa. Cada vía tenía un pasado diferente y una visión de futuro, asimismo, diferente, por lo que es necesario detenerse, así sea brevemente, en la visión del pasado que tenían los hombres de aquella época.

Seymour Menton Lipset, el célebre politólogo estadounidense, en su texto sobre *The First New Nation*, mostró que entre los obstáculos que otras naciones enfrentaron para alcanzar el desarrollo no debieron enfrentar los obstáculos que otras sociedades, vale decir la mexicana, tuvieron que enfrentar para poder arribar a un nuevo tipo de sociedad. En otros términos, la sociedad estadounidense no tuvo que enfrentarse, cuando se redactó su Constitución, al problema que representan los intereses que defiende la constitución histórica.⁷

⁶ Emilio Rabasa, *La Constitución y la dictadura, Estudio sobre la organización política de México*, México, Conaculta (Cien de México), 2002, p. 104

⁷ Cfr. Seymour Martin Lipset, *Estados Unidos: juicio y análisis; los Estados Unidos en una perspectiva histórica y comparativa*, Cali, Norma, 1966.

Si se hiciera una distinción entre los elementos que conforman la constitución histórica y los que conforman el documento que se conoce como Constitución política, muchas discusiones se mostrarían como absurdas. La pugna decimonónica descansó sobre la preeminencia que una debiera tener sobre la otra. Un sector, el conservador, afirmaba que debía atenderse la constitución histórica, mientras que el sector reformista, argumentaba lo contrario.

La lucha entre las dos constituciones ocupa —no sólo en nuestro país, sino en el orbe entero— un capítulo de indudable importancia porque en él se aborda el nacimiento de una sociedad moderna, igualitaria, así como la lucha que se debió dar para vencer a los defensores del privilegio. La Constitución de 1857 marca un hito en el largo y difícil camino por establecer las condiciones de la igualdad en nuestro país; la lucha entre las dos constituciones, la histórica, que defiende el interés y la desigualdad en la tradición, en la costumbre, y la Constitución escrita, que persigue modificar la injusticia y la desigualdad histórica.

La distancia entre el país que había sido —que se había conformado a través de un largo proceso de sedimentación con la contribución de innumerables generaciones— y el país que la generación de la Reforma quería que fuera —y con ese objetivo propuso una nueva forma para constituirse— tuvo que romper con la tradición. Este proceso, que se repite prácticamente en la historia de todas las naciones modernas, comprende la doble forma de entender la Constitución: como fondo, como organización social en la que el Estado surgió de la independencia y en la que la voluntad de los hombres ha contribuido en forma mínima, y como forma, como modelo que se diseña para constituirse de acuerdo con un patrón ideal, continente y como contenido, sólo se resolvió mediante el uso de la fuerza.

La defensa que el pensamiento conservador hizo de la realidad, entendida ésta como la continuidad de la tradición, argumentó a favor de la legitimidad del privilegio y adujo los especiales servicios que la Iglesia había prestado a la sociedad. La calidad de estos servicios fue pre-

sentada como justificante para el privilegio y la inmunidad.

Los defensores de la constitución tradicional apelaron —no podía ser de otra manera— al orden divino ajeno a la voluntad de los hombres. El obispo de Puebla y posterior arzobispo de México, Pelagio A. de Labastida y Dávalos, protestó contra la Ley Juárez, antecedente directo de la Constitución de 1857, por considerar que negaba el derecho de la tradición:

La Iglesia es una sociedad soberana e independiente y bajo este respecto es preciso convenir en que sus relaciones con las otras sociedades o estados deben normarse por los principios del derecho consuetudinario [...] todos no hay duda, están de acuerdo en esto y convendrán al mismo tiempo que el fuero eclesiástico, muy diferente del militar, que parece ha querido igualar, lo tiene el sacerdocio, el ministerio católico, no por derecho o gracia, o favor otorgado por el poder civil, sino en virtud de un derecho preexistente, superior a la autoridad temporal quien preside a la sociedad y a la legislación civil.⁸

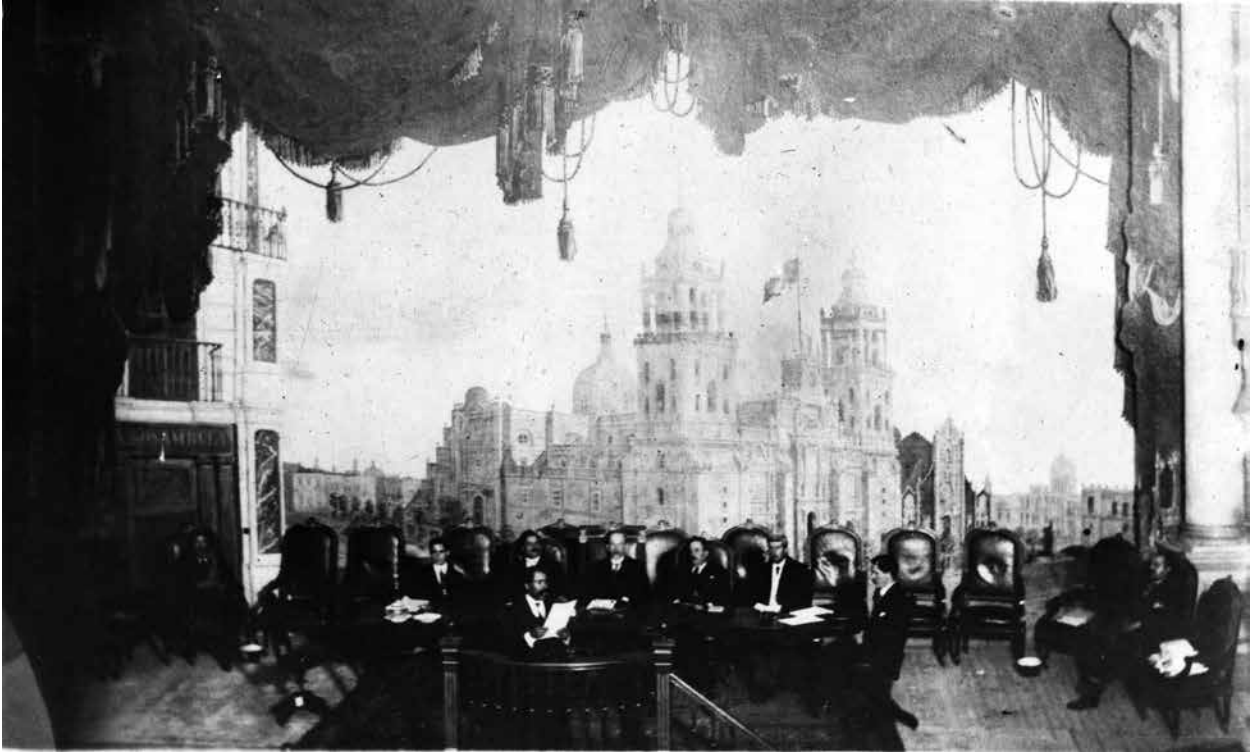
Alexis de Gabriac, diplomático francés, por su parte, informó a su gobierno:

La ley de su sucesor, Juárez, que abroga todas estas mejoras, es una maraña de huecas teorías y de imprudencia que no tienen perdón [...] La abolición de los fueros eclesiásticos constituye un acto de temeridad incalculable, tratándose de un gobierno cuya debilidad, inercia y desórdenes van a deben ir infaliblemente a la ruina.⁹

Se puede advertir que para los partidarios de la constitución histórica cualquier legislación que intentara modificarla conduciría al país,

⁸ Cfr. Silvestre Villegas Revueltas, *El liberalismo moderado en México*, México, UNAM, 1997, p. 88.

⁹ Moisés González Navarro, "La ley Juárez", en *Historia Mexicana*, t. LV, núm. 3, 2006, p. 962.



El C. Antonio Hidalgo impugna un credencial. Fototeca Constantino Reyes-Valerio, CNMH/INAH. Fondo Carranza. Historia Gráfica del Gobierno Constituyente, celebrado en Querétaro de Arteaga, del 20 de noviembre de 1916 al mes de febrero de 1917.

inevitablemente, a su ruina. Es curioso observar, a manera de comentario, la capacidad de presciencia que manifestaron los conservadores desde el siglo XIX; fueron capaces de anunciar las tragedias que ocurrirían si ellos abandonaban el poder, pero incapaces de anunciar la crisis que por sus acciones ellos mismos desataron. En este contexto, en el que unos saben lo que ocurriría, no resulta sorprendente la descalificación que hacen de sus adversarios a los que tildan de ignorantes y que tiene sus raíces en lo que, según ellos, había ocurrido en el proceso de independencia. Esta línea interpretativa sólo fue un corolario de la opinión que descalificó a la Constitución de 1824, misma que el heraldo del conservadurismo mexicano, Lucas Alamán, valoró como instrumento para eliminar la participación tumultuaria de los desposeídos, no como un instrumento para modificar la estructura piramidal de la sociedad. La valoró, asimismo, porque expresó una división tajante entre los sabios y los ignorantes.

Esta postura de Alamán era compartida por varios políticos de la época. Éstos, entendieron —afirma el estudioso Manuel Herrera y Lasso, refiriéndose a Mier, del Valle, de Zavala— e intentaron legislar para México, el México de entonces, avizorando el panorama de la república sin que infirmaran su visión los engañosos fuegos fatuos del patriotismo. La severa franqueza con que denuncian el estado general de “una Nación donde más de la mitad de la población se compone de indios estúpidos e ignorantes” está muy por encima de la ofuscación sufragista que en el Congreso de 1856 hace enmudecer a Arriaga al sostener el voto restringido que excluye a los analfabetos y aclama a los oradores que ensalzan las virtudes cívicas del pueblo: su cordura, su tino político, su prudencia electoral”.¹⁰

El mismo autor recuerda, citando a Zarco, que en las sesiones del 18 y del 25 de septiem-

bre y en la del 16 de octubre de ese mismo año, Ramírez y Zarco recogieron los aplausos de las galerías entonando el panegírico del pueblo: “Soberano a quien se quería despojar de su centro” y en cuyo “instinto y cordura” se debiera siempre confiar. Ocampo dijo la última, desmesurada, palabra: “Si el pueblo yerra alguna vez, esto no es motivo para arrancarle sus derechos, es el dueño de la casa y pondrá a administrarla a quien juzgue más a propósito”.¹¹

Si la Constitución de 1857 ha sido analizada como el parteaguas del México tradicional y el México moderno es porque puede ser vista no como un conjunto de ideas descabelladas opuestas a la constitución histórica, sino como un ejemplo de la cerrazón de quienes no la respetaron por considerar que la nueva Carta Magna, no reflejaba los argumentos de la tradición en los que se basaba la desigualdad y el privilegio.

En los hechos, la inocultable realidad mostraba en esos años una sociedad profundamente dividida, enfrentada, en guerra, que requería para vivir en paz, de una nueva Constitución. En ese momento, como en el de la primera independencia, el pacto social confrontó el ideal igualitario con los intereses que defendían los privilegios corporativos realmente existentes. Un sector de la sociedad interpretó la Constitución como un intento de unir lo dividido; sin embargo, desde la perspectiva de los conservadores, la unión sólo se podía entender a través del prisma de la religión, de los privilegios eclesiásticos y militares; para los detentadores de éstos, cualquier cambio provocaría la desgracia del país.

Rasgo de las estructuras tradicionales es el de estar dotadas de un prestigio multiseccular que las convierte, de hecho, en “naturales”; característica de las nuevas instituciones es el de nacer sin el prestigio que otorga el tiempo ya que lo que perdura es percibido como una fuerza de la naturaleza, mientras que lo naciente, como la constitución de 1857, no puede ser visto sino como producto de la acción del hombre. Si bien la cuestión de la primera independencia había quedado zanjada por el hecho de la incapacidad

¹⁰ Manuel Herrera y Lasso, “Centralismo y federalismo”, en *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, México, Cámara de Diputados, 1967, t. I, p. 602.

¹¹ *Ibidem*, p. 634.

de la monarquía de enviar un ejército para restablecer el viejo orden; la segunda independencia, no ya de España sino de sus estructuras mentales forjadas entre nosotros a lo largo de tres siglos, fue una tarea más difícil aún.

La Constitución de 1857 representó la larga marcha del encono entre criollos, españoles, indios y castas. Éstos habían librado a lo largo de medio siglo una guerra más larga y sangrienta que la de Troya; en ella se destruyeron vidas y haciendas, se persiguieron con saña a sus oponentes por todo lo largo y ancho del territorio, se dividieron padres e hijos, lucharon entre sí los miembros de una misma familia, el hermano agredió al hermano, y después de once interminables años en los que no hubo vencedores ni vencidos, no es un accidente que los guerreros de los dos campos decidieran, mediante la Constitución de 1824, olvidar sus mutuas ofensas y pactar los términos en que se daría la independencia y, una vez lograda ésta, los de la convivencia. En este contexto, no es de extrañar que no se hablara más de victorias ni derrotas, que dejaran de mencionarse las encarnizadas rivalidades, y que la palabra *independencia* fuera utilizada como poción mágica para curar todos los males. La independencia, como gigantesco manto, a todos dio abrigo, tanto a los que —como Agustín Iturbide— habían cometido verdaderas carnicerías en nombre del rey y la religión, como a quienes —como Vicente Guerrero— habían librado en difíciles condiciones una larga guerra de guerrillas en defensa de la independencia. Este contexto de viejas ofensas y rivalidades se desdibujó cuando el acuerdo entre los rivales permitió una paz honorífica; la independencia patria es la clave que justifica el silencio de todos y la explicación de que nadie mencionara en voz alta la palabra *arreglo*. En los hechos, si bien la Constitución de 1824 garantizó la independencia del país, el documento operó

más como una tregua pactada por los oponentes para poder recuperar fuerzas y, una vez curadas las heridas, volver al combate con la misma intensidad, aunque en el nuevo episodio todos los rivales lucharon bajo banderas mexicanas. La Constitución no borró el antiguo antagonismo, sólo permitió que los viejos rivales se agruparan bajo otros nombres. Imperiales y republicanos, centralista y federalistas, yorkinos y escoceses.

Las dos facciones en pugna buscaron cada una imponer su propia ley y, al no poder lograrlo, negociaron al amparo de una organización política totalmente desconocida, la república, una forma de convivencia que les permitiera considerar que no habían sido derrotadas. En estas condiciones es difícil entender la Constitución como una ley igual y aplicable a cada uno de los miembros de la sociedad. ¿Cómo entenderla sino como arreglo?

La doble constitución de México, la del país que, si bien logró la independencia, conservó las estructuras tradicionales, y la del país que adoptó un ropaje, lenguaje y leyes que, en lo formal, correspondieron al liberalismo, en la realidad profundizó la distancia entre las instituciones reales: la constitución de la sociedad colonial y las nacientes instituciones formales. Esta doble constitución, la del Antiguo Régimen, la de la tradición colonial y la Constitución formal, expresó la constante que a lo largo de la historia decimonónica del país y, a través de ella, mostró los conflictos políticos y las contradicciones de una sociedad con estructura colonial que aspiraba a constituirse como moderna, es decir, como sociedad en la que el ideal democrático obligaba a profundas transformaciones, y otra que temía estas transformaciones y sólo se interesaba en el diseño de cauces teóricos por los que, en un hipotético futuro, la sociedad pudiera transitar pacíficamente hacia su conversión democrática.